



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, seis (06) de febrero de dos mil veinte (2020)

Medio de control: Ejecutivo

Radicado: 15001 33 33 009 **2019 00154 00**

Demandante: **Nelly Edith Saavedra Ruiz**

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social – UGPP

I. ASUNTO

El expediente ingresó al Despacho con memorial suscrito por la apoderada de la entidad demandada, por medio del cual interpuso y sustentó el recurso de reposición contra el auto de 10 de octubre de 2019, por medio del cual se libró mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

Mediante auto de 10 de octubre de 2019, se ordenó librar mandamiento de pago ejecutivo a favor de la señora Nelly Edith Saavedra Ruiz contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las siguientes sumas de dinero:

1. *Por la suma de cinco millones cuarenta y seis mil ciento ochenta pesos con siete centavos (\$5.046.180,07), por concepto de intereses moratorios causados sobre el valor de las diferencias de las mesadas reconocidas y pagadas a la demandante, desde el 17 de septiembre de 2015 hasta el 25 de octubre de 2016, conforme a los plazos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA.*
2. *Por la suma de setecientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos con catorce centavos.(\$734.948,14), por concepto de*

costas y agencias en derecho del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No 15001333300420120009600.”

III. DEL RECURSO

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP manifestó que la sentencia que servía de título ejecutivo en la presente acción no estableció en forma clara y concreta la cuantía a cancelar, por lo que no contenía una obligación clara expresa y exigible y, por tanto, al no prestar merito ejecutivo, no debió librarse mandamiento de pago con base en la misma.

Añadió que la sentencia se profirió en abstracto, luego, la parte beneficiada debió iniciar incidente de liquidación por condena en abstracto, pues no era posible ejecutar la sentencia por indeterminación de la obligación, así que debió rechazarse la demanda por no tramitarse dicho incidente.

De otra parte, con base en lo dispuesto en el numeral 3.º artículo 442 del CGP, propuso las excepciones que denominó:

- i) **Caducidad de la acción ejecutiva**, por cuanto la demanda fue presentada en el tránsito normativo del Decreto 01 de 1984, luego, para que el título fuere ejecutable, debía hacerse exigible luego de los 18 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 177 *ibídem*.
- ii) **Indebida conformación del título ejecutivo**, en la medida en que no se prueba la fecha en la cual la demandante habría radicado completa la documentación exigida por la entidad, para dar cumplimiento al fallo. Asimismo, porque la causación de intereses se suspende luego de los 3 primeros meses hasta la fecha en que se radiquen todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia.
- iii) **Inexistencia del título frente a los intereses moratorios**, comoquiera que la entidad demandada nunca estuvo en mora en el pago de diferencias de mesadas pensionales e intereses, pues la ejecutante no presentó

oportunamente la solicitud de pago, por lo que, adicionalmente, existía una indebida conformación del título ejecutivo.

Manifestó que una cosa era radicar la sentencia para cobro, y otra era aportar la totalidad de la documentación requerida para el pago del retroactivo pensional, de tal forma que los intereses se suspendían a partir del día siguiente a los primeros tres meses y hasta la radicación de la declaración juramentada

iv) No existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago, puesto que no resultaba procedente librar mandamiento de pago con fundamento en la documentación aportada por la parte demandante.

v) Inexistencia de obligación clara, expresa y exigible. Señaló que en el *sub examine* el título base de recaudo era complejo, y por ello debía estar integrado por la sentencia judicial, la constancia de ejecutoria de la misma y el recibo de pago de las condenas impuestas a la entidad, de manera que el recibo de pago y la liquidación que discrimine los conceptos pagados hacían parte integral del título ejecutivo complejo.

Estimó que al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, hoy 195 del CPACA, para que se establezca una mora en el pago de los conceptos ordenados por el Despacho, era necesario que la parte ejecutante aportara el recibo de pago en copia auténtica o en original, situación que no se vislumbró en el expediente.

vii) De la liquidación de los intereses moratorios. Preciso que los guarismos y conceptos por los cuales se libró mandamiento de pago, distan totalmente de las actuaciones administrativas realizadas por la entidad, es así que el valor arrojado por intereses moratorios es superior al liquidado por la entidad, el cual arrojó un valor de \$2.594.706,68, liquidados entre el 17 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, de manera que solicitó revisar la liquidación correspondiente. De igual manera, indicó que mediante Resolución No 1681 de 14 de diciembre de 2017 se ordenó el pago por concepto de intereses moratorios, por valor de \$2.594.706,88, conforme al comprobante de orden pago presupuestal que anexó.

IV) DEL TRASLADO DE EXCEPCIONES

Dentro del término de traslado, la parte demandante guardó silencio.

V) CONSIDERACIONES

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló el trámite del proceso ejecutivo adelantado en la jurisdicción contencioso administrativa, si bien, se establecen normas que regulan algunos aspectos propios de esta clase de procesos, como son, por ejemplo: los documentos que prestan mérito ejecutivo, la notificación del mandamiento de pago, la competencia para conocer de los procesos ejecutivos, entre otros; el procedimiento general que debe seguir el juez no se encuentra regulado en esta Ley, por lo cual, conforme a la remisión contenida los artículos 299 y 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde aplicar las reglas propias del proceso ejecutivo establecidas en el Código General del Proceso.

Dicho Estatuto dispone en el artículo 430, inciso 2.º que (...)“*Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada mediante dicho recurso...*”

Asimismo, a la luz de lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 442 *ibídem* los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago.

Por tanto, el recurso interpuesto es procedente para refutar el título base de recaudo en lo relativo a que los documentos que lo integran conformen una unidad jurídica, emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y, por otra parte, para alegar los hechos que configuran excepciones previas.

En lo relacionado con la oportunidad de este recurso, los artículos 318 y 319 del CGP disponen lo siguiente:

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. (...)

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

Artículo 319. Trámite. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

De lo anterior, en el caso concreto, puede concluirse que el recurso ejercido es procedente y fue interpuesto oportunamente, por lo que el Despacho procederá a desatarlo como sigue:

i) Sobre la caducidad de la acción ejecutiva.

El argumento esgrimido por la entidad ejecutada no es de recibo, comoquiera que el Despacho retomará los planteamientos expuestos al momento de librar mandamiento de pago, específicamente, respecto al análisis de la caducidad de la acción ejecutiva.

En tal virtud, se encuentra que la sentencia base de la ejecución cobro ejecutoria el **17 de septiembre de 2015** (f. 69 reverso) y una vez transcurrieron los diez (10) meses de que trata el artículo 195 del CPACA, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **16 de agosto de 2019** (f. 8).

Así las cosas, no operó el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva habida cuenta que la demanda se formuló dentro del término de los cinco (5) años previstos en el CPACA,.

ii) Sobre la indebida conformación del título ejecutivo y la inexistencia del título frente a los intereses moratorios

La recurrente cuestionó la fecha en que se realizó la reclamación administrativa de cumplimiento del fallo para efectos de generación de los intereses por parte de la demandante, sin hacer precisiones sobre la fecha en que considera que se dio tal reclamación; sin embargo, de la documental aportada con la demanda se advierte que dicha reclamación habría sido radicada el 21 de diciembre de 2015.

Lo que implica que comoquiera que la parte demandante no radicó la solicitud de cumplimiento dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del fallo, la causación de intereses moratorios se suspendió, tal como se anotó en la liquidación del mandamiento de pago ejecutivo, no obstante, nuevamente se generaron intereses de mora con la radicación de la referida solicitud, habida cuenta que para ese momento, esto el 21 de diciembre de 2015, la entidad demandada no había dado cumplimiento a la sentencia base de la ejecución.

En consecuencia, sin mayores elucubraciones se puede establecer que estos medios exceptivos deben despacharse desfavorablemente, por cuanto los supuestos de hecho planteados por la entidad demandada no corresponden con la realidad de la actuación.

iii) Sobre la inexistencia de título ejecutivo Idóneo para fundamentar el mandamiento de pago e inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible.

La apoderada de la UGPP señaló que es obligación de la parte ejecutante aportar todos los documentos que integren el título ejecutivo complejo de cobro en original o copia auténtica, entre ellos, la sentencia, la constancia de ejecutoria de la misma, el recibo de pago de las condenas y la liquidación expedida por la entidad en la cual se discriminan los valores y conceptos que dan cuenta del cumplimiento de la sentencia base de la ejecución, sin que en el presente proceso se hayan allegado al expediente de manera completa, de manera que no es posible determinar el monto presuntamente debido por concepto de intereses moratorios.

De acuerdo a lo anterior, es de resaltar que el numeral 1º del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, es decir, que cuando se pretenda ejecutar una sentencia judicial condenatoria no se requerirá más allá de su copia auténtica y su correspondiente constancia de ejecutoria¹, pues es esta providencia la que contiene las obligaciones que se pretenden ejecutar.

Bajo ese entendido, tanto las resoluciones emitidas por la entidad ejecutada en aras de dar cumplimiento al fallo, así como el comprobante de pago de los actos administrativos, son meramente anexos de la demanda que dan cuenta del incumplimiento total o parcial de las órdenes emitidas en la sentencia y de las sumas de dinero reconocidas y/o pagadas, de manera que se constituyen en anexos ilustrativos de la demanda, pero que no tienen la connotación de documentos necesarios para la conformación del título ejecutivo.

En el caso concreto, la parte ejecutante aportó copia auténtica de las sentencias de 10 de febrero y 11 de septiembre de 2015 (fs. 11-32), proferidas por este Despacho y el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, junto con el original de la constancia de ejecutoria (f. 69), documentos que integran debidamente el título ejecutivo. Adicionalmente, dichas providencias contienen unas obligaciones claras y expresas respecto a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la demandante, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año de consolidación del status pensional, y de dar cumplimiento a lo allí ordenado en los términos de los artículos 192 del CPACA, lo cual incluye el pago de los intereses moratorios, de tal suerte que se quedan sin piso los argumentos esbozados por la apoderada de la entidad ejecutada.

iv) De la liquidación de intereses moratorios

Indicó la recurrente que los guarismos y conceptos por los cuales se libró mandamiento de pago distan totalmente de la liquidación efectuada por la entidad.

¹ Tribunal Administrativo de Boyacá, auto de 25 de agosto de 2016, proferido dentro del expediente No. 2013-00241 con ponencia del Dr. Fabio Iván Afanador García.

en la medida que el valor de los interés liquidados, entre el 17 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, se establece en la suma de \$ 2.594.706,68

Así las cosas, el Despacho encuentra que la liquidación elaborada para librar mandamiento de pago ejecutivo determinó el valor de \$5.046.180,07 por concepto de intereses moratorios, en cuanto la fecha en la que se realizó el pago efectivo de las sumas de dinero reconocidas en la Resolución No 019508 de 19 de mayo de 2016, fue el 25 de octubre de 2016, conforme al cupón de pago del FOPEP que obra a folio 94 del expediente, y no como erróneamente lo indicó la recurrente, es decir el 30 de junio de ese mismo año. Adicionalmente, el Despacho encuentra que la tasa de interés aplicada en la liquidación efectuada por la UGPP, no corresponde a la tasa comercial (1,5 veces el interés bancario corriente), razones por las cuales los argumentos esbozados no se encuentran llamados a prosperar.

En este orden, se concluye que los argumentos expuestos por la entidad demandada no se encuentran llamados a prosperar, razón por la cual no procede reponer el auto de 10 de octubre de 2019, por medio del cual se libró mandamiento de pago ejecutivo a favor de la señora Nelly Edith Saavedra Ruiz.

De conformidad con lo antes expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja.

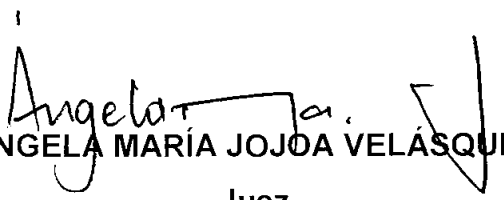
RESUELVE

PRIMERO.- No reponer el auto de 10 de octubre de 2019, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Declarar no probadas las excepciones de caducidad de la acción ejecutiva, indebida conformación del título ejecutivo, inexistencia del título ejecutivo frente a los intereses moratorios, no existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago, inexistencia de una obligación, clara, expresa y exigible y de la liquidación de los intereses moratorios, propuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por lo expuesto en esta providencia.

TERCERO.-Reconocer personería a la abogada Laura Maritza Sandoval Briceño, identificada con C.C. N° 46.451.568 y T.P. N° 139.667 del C. S. de la J., para actuar como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los términos del poder visto a folios 169 y s. s del expediente.

Notifíquese y cúmplase

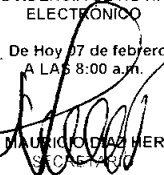

ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO

N.º 3 De Hoy 07 de febrero de 2020
A LAS 8:00 a.m.


FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

² AMRS

Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 07 de febrero de 2020 en la página web www.ramajudicial.gov.co Ferney Mauricio Díaz Hernández Secretario